



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial del Poder Público



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ RICO**
Demandado : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**
Radicado : **05001 31 05 004 2016 00493 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad social –Pensión especial de vejez por alto riesgo, intereses moratorios-
Decisión : Confirma Sentencia condenatoria
Sentencia No : 261

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se condene al reconocimiento y pago de **pensión especial de vejez por alto riesgo**, mesadas adicionales, **intereses moratorios**, indexación.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que el demandante nació el 25 de noviembre de 1962, estuvo vinculado al I.S.S. y es beneficiario del régimen de transición, ya que para el año 2003 había cotizado más de 500 semanas por alto riesgo; cuenta con más de 50 años de edad y supera las 1.300 semanas cotizadas; ha estado **vinculado al trabajo de minería en labores bajo tierra** con la empresa Industrial Hullera en Liquidación Obligatoria, desde el 16 de enero de 1989 hasta el 1º de enero de 1998, en Mineros Unidos del 1º de febrero de 1999 al 31 de octubre de 2007 y con Carbones San Fernando desde el 1º de junio de 2011 hasta el 1º de abril de 2013. Reclamó pensión especial de vejez por alto riesgo el día 24 de febrero de 2014, sin que la demandada resolviera la solicitud.

Respuesta a la demanda:

COLPENSIONES a través de apoderado judicial, aceptó lo referente a la edad y afiliación del demandante, frente a los demás hechos expuso que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones que denominó inexistencia de la obligación, improcedencia de intereses moratorios e

indexación, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas.

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Cuarto Laboral** del Circuito de Medellín, **declaró que el demandante tiene derecho a la pensión especial de vejez por alto riesgo por su trabajo en minería subterránea conforme al Decreto 2090 de 2003, condenó a COLPENSIONES** a reconocer y pagar la pensión especial de vejez a partir del 25 de noviembre de 2012, en forma vitalicia, con derecho a 13 mesadas al año, en suma equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, con retroactivo pensional en cuantía de **\$76.158.451** causado hasta el 31 de diciembre de 2020; continuar pagando la mesada pensional desde el **1° de enero de 2021**, con incrementos anuales y 13 mesadas al año; intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo pensional, causados desde el 26 de noviembre de 2017 hasta el pago de la obligación. Absolvió de la pretensión de indexación. Condenó en **Costas** a la demandada, fijando como agencias en derecho \$6.000.000 a favor del demandante.

Recurso de apelación apoderada COLPENSIONES:

Solicita se modifique la fecha de disfrute de la pensión especial de vejez por alto riesgo, teniendo en cuenta que la última cotización se efectuó el día 30 de julio de 2015, pues si bien el juzgador cita una Sentencia del año 2016, la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia posterior SL2807-2018, SL472-2018, SL5105-2018 y artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de

1990, el disfrute se da a partir del retiro del Sistema de Pensiones, norma que opera aunque se trate de una pensión especial en la que se reduce la edad, se hace necesaria la desafiliación para el disfrute de la pensión.

Alegatos de conclusión:

El apoderado de COLPENSIONES solicita se revoque la decisión condenatoria de Primera Instancia, afirmando que en la historia laboral **no existen cotizaciones especiales para acceder a la pensión especial de vejez por alto riesgo**, la Administradora de Riesgos Profesionales **no aportó constancia sobre las condiciones del puesto de trabajo** para establecer que se desempeñaba en socavones, con dedicación permanente.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación** y se conocerá también en el grado jurisdiccional de **Consulta** en favor de COLPENSIONES; de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984; 15, 66 A y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, respectivamente.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir radica en verificar si hay lugar a modificar la Sentencia de Primera Instancia, en cuanto a la fecha del disfrute de la pensión especial de vejez por alto riesgo. En consulta en favor de COLPENSIONES se revisará las demás condenas.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

Se revisa en Consulta la condena al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por alto riesgo:

Conforme a lo establecido en el **Decreto 2090 de 2003** “*Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades*”, cuya vigencia fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2024 por disposición del Decreto 2655 del 17 de diciembre de 2014, se definen como **actividades de alto riesgo** para la salud del trabajador, entre otros, los **trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos** (numeral 1° del artículo 2°). Para tener derecho a la pensión especial de vejez, **los afiliados que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior**, deben acreditar por lo menos 700 semanas continuas o discontinuas de cotización especial, superar la edad de 55 años y haber cotizado como mínimo las semanas exigidas por la Ley 797 de 2003; caso en el cual, la edad se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas

requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que pueda ser inferior a los 50 años (ver artículos 4° y 5°); con un régimen de transición cuyas condiciones se establecen en el artículo 6°.

En el asunto bajo estudio, la prestación del servicio en actividades de alto riesgo se encuentra acreditada, con la certificación del Liquidador de la sociedad Industrial Hullera S.A., según la cual, el señor Gustavo Adolfo Ramírez Rico laboró desde el día 10 de enero de 1989 hasta el 1° de junio de 1998, desempeñando el cargo de *peón de mina en socavón, clase de riesgo: alto riesgo* (fl 181 archivo 01); el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo de **Carbones San Fernando informó que laboró al servicio de la compañía **desde el 3 de junio de 2011 hasta el 15 de abril de 2013**, en labores de *oficios varios minería subterránea realizando funciones de encapizador – palero, en turnos rotativos de 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00* (fl 165 archivo 01); **lo cual se corrobora con las declaraciones de los testigos Bernardo Antonio Restrepo Muñoz y Luis Emilio Serna Muñoz, quienes afirmaron que el demandante desempeñó dichas funciones en minería subterránea, en el socavón.****

Esta información es concordante con el contenido de la **historia laboral** expedida por COLPENSIONES actualizada el 11 de agosto de 2015, donde el demandante registra afiliación y cotizaciones con Industrial Hullera desde el 16 de enero de 1989 hasta el 30 de septiembre de 1999 (fls 19 a 28 archivo 01); así mismo, con acta de audiencia de conciliación celebrada el día 27 de noviembre de 2007 en la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio de la Protección Social, con el Representante Legal de Industrial Hullera S.A. en Liquidación Obligatoria y con el

apoderado especial de Cementos Argos S.A. (quien asumió el pago de cotizaciones por alto riesgo), donde quedó consignado que el demandante **ingresó a laborar el 10 de enero de 1989** mediante un contrato a término indefinido y que el empleador adeudaba las cotizaciones en seguridad social en pensiones con **alto riesgo**, las cuales se pagarían al entonces I.S.S., previa cuenta de cobro, por el periodo igual o equivalente a las causadas desde el día en que ingresó a laborar, hasta el momento de la **terminación del contrato de trabajo el día 1º de junio de 1998, todas en alto riesgo**. Así mismo, el apoderado de Cementos Argos S.A. indicó que las empresas por él representadas, se obligaban a pagar al I.S.S., el valor de las cotizaciones que por pensiones y en **alto riesgo, adeudara Mineros Unidos S.A.**, hasta cuando el demandante laboró allí, esto es, el **30 de octubre de 2007** (fls 153 a 159) y según historia laboral, presenta cotizaciones con Mineros Unidos S.A. entre el **1º de febrero de 1999 y el 31 de octubre de 2007** (fls 19 a 21 archivo 03).

Aunque en la Sentencia de Primera Instancia no se hizo referencia al pago de los aportes adicionales por la actividad de alto riesgo y en el expediente no hay constancia de haberse realizado el pago efectivo, conforme a lo acordado en el acta de conciliación aportada, ello no es impedimento para tener en cuenta ese tiempo como válido en la densidad de semanas, ya que la no realización de los aportes adicionales, no exonera a la entidad de seguridad social del reconocimiento del derecho pensional pretendido, siendo una obligación a cargo del empleador, cuyo incumplimiento no puede acarrear desmedro en los derechos pensionales del trabajador que prestó sus servicios en actividades de alto riesgo, ver **Sentencias SL1196 de 2020** Radicado 76191, **SL1274 de 2019** Radicado 40567. Así mismo,

es válido tener en cuenta los periodos aportados en condición de alto riesgo anteriores a 1994, teniendo en cuenta que antes de ese año no existía la obligación de efectuar el aporte adicional, lo que surgió con la expedición del Decreto 1281 del 22 de junio 1994, ver **Sentencia SL999 de 2020** Rad. 67163.

De acuerdo a lo anterior, **el demandante cuenta con 1.520,85 semanas de cotización**, cumpliendo el requisito de semanas exigido en la Ley 797 de 2003 (se incluyen 4.495,57 reconocidas en la historia laboral generada el 15 de febrero de 2018 –expediente administrativo- y 25.28 semanas por periodos desconocidos -julio, agosto, septiembre, noviembre de 1997 y enero y febrero de 1998 o registrados en forma incompleta con la observación *pago aplicado a periodos anteriores*-, lo que implica una mora y no hay lugar a descontar esos días, sin que la entidad hubiera demostrado que adelantó las acciones de cobro correspondientes); de las cuales, **1.003 son de cotización especial** por actividades de alto riesgo, que superan las 700 exigidas en el Decreto 2090 de 2003. **La edad de 55 años la alcanzó el 25 de noviembre de 2017**, al haber nacido el mismo día y mes de 1962 (fl 35 archivo 01).

Por tanto, es procedente la disminución en el requisito de la edad, en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial adicionales a las mínimas requeridas, sin que pueda ser inferior a los 50 años, como lo dispone el artículo 4° del Decreto 2090 de 2003 y al contar con 1.003 semanas de cotización especial, hay lugar a descontar cinco (5) años, para disfrutar de la pensión especial de vejez a partir de los 50 años, es decir, 25 de noviembre de 2012, con derecho a 13 mesadas al año; tal como explicó el Juez de Primera Instancia.

En lo referente a que se modifique la fecha del disfrute de la pensión especial de vejez, afirmando la apoderada de COLPENSIONES que éste se da **a partir del retiro del Sistema de Pensiones y que la última cotización se efectuó el día 30 de julio de 2015**; tenemos que:

Si bien el reconocimiento de la pensión de vejez se encuentra supeditado al hecho de la desafiliación definitiva al Sistema, como situación previa para su pago, también lo es que se presentan dos momentos que no deben confundirse, uno es la **causación** de la pensión el cual se produce desde el momento en que se reúnen los requisitos para su reconocimiento, esto es, edad y densidad de cotizaciones, y el otro, el **disfrute**, que se configura a partir del instante en que lo solicite el afiliado y se acredite su desafiliación del Sistema.

Al respecto, **el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990**, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, **establece que el pago de la pensión de vejez se encuentra supeditado al hecho de la desafiliación definitiva del sistema, como situación previa para que el afiliado pueda disfrutar su pensión.**

Así mismo, **el artículo 35** ibídem, entre otros aspectos, señala que las pensiones del Seguro Social, se pagarán por mensualidades vencidas, previo el retiro del asegurado, de la prestación real y efectiva del servicio por parte de los servidores públicos, o del **retiro del régimen para los trabajadores del sector privado.**

Sin embargo, pueden presentarse situaciones particulares donde la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H.

Corte Suprema de Justicia, como en **Sentencia SL2004-2022**, reiterando SL414-2022 y SL1353-2019, ha indicado que **es posible acudir a fechas anteriores a la del retiro del sistema**, cuando como por ejemplo, se infiere que la voluntad del afiliado no era continuar vinculado a éste y se ha inducido en error peticionario para que continúe cotizando; veamos:

*“...si bien por regla general para que la pensión se haga exigible se requiere la desvinculación formal del sistema de pensiones, de manera excepcional y ante situaciones particulares y especialísimas, **es posible acudir a fechas anteriores a la del retiro del sistema, cuando como por ejemplo, se infiere que la voluntad del afiliado no era continuar vinculado a éste**, tal y como sucede en el presente asunto, conforme lo advirtió el juez plural, puesto que Colpensiones negó la pensión solicitada e indicó que se debía continuar cotizando para causar la pensión ordinaria de vejez (CSJ SL414-2022, SL1353-2019)...”.*

En la misma Providencia, explicó que **no es acertado exigir que al momento de la reclamación tenga cumplido los 55 años de edad; porque si acredita el número de semanas exigidas**, puede rebajarse la edad hasta los 50 años (un (1) año por cada 60 semanas de cotización especial adicionales a las mínimas exigidas); el propósito de la prestación es reducir la exposición del trabajador a la actividad que representa un desmedro para su salud; en los siguientes términos:

*“...En otras palabras, **no resulta razonable exigirle al afiliado para que solicite el reconocimiento de la pensión especial de vejez, que acredite 55 o 62 años**, como lo sugiere la recurrente, pues el desarrollo de **la prerrogativa pensional** bajo análisis por parte del legislador, tiene como **finalidad, brindarle una protección al trabajador** que en atención al tipo de actividad que desempeña, se ha visto expuesto durante la ejecución de sus labores a condiciones extremas para su salud, lo que representa un detrimento en la misma, y en razón a ello, es que **se busca que pueda retirarse de su actividad con antelación al resto de trabajadores**.*

(...)

*Luego entonces, en casos como el presente, donde no se logró desvirtuar que el trabajador estuvo expuesto a una actividad considerada de alto riesgo, **resulta desatinado exigirle las edades puestas de presente por la recurrente, pues ello solo conduciría a la causación de un retroactivo pensional, no logrando el objetivo buscado por la prestación acá analizada, como lo es, reducir la exposición del trabajador a aquella***

actividad que representa un desmedro para su salud...” (Negritas fuera de texto).

En el asunto bajo análisis, el Juez de Primera Instancia puso de presente que el demandante reclamó la pensión especial de vejez el día 27 de enero de 2014 (expediente administrativo), fecha para la cual no contaba con los 55 años de edad exigidos en el artículo 4° del Decreto 2090 de 2003, alcanzados el 25 de noviembre de 2017; no obstante, declaró que tiene derecho al disfrute desde el mismo día y mes del año 2012 cuando cumplió 50 años de edad, por efectos del descuento de un (1) año por cada 60 semanas de cotización especial adicionales a las mínimas exigidas, como quedó explicado y teniendo en cuenta que, COLPENSIONES negó la pensión de vejez según Resolución GNR 60301 del 26 de febrero de 2014, omitiendo el estudio conforme al Decreto 2090 de 2003 por ser de alto riesgo y en su lugar, lo hizo bajo los parámetros de la Ley 797 de 2003 donde para el año 2014 se requería contar con 60 años de edad y solo tenía 51 años; entendiéndose que **la decisión de la entidad de seguridad social de negar el reconocimiento de la pensión especial de vejez, contando el afiliado con la densidad de semanas que le permitían reducir la edad, fue la causa que lo condujo a continuar efectuando cotizaciones al Sistema de Pensiones**, sin que exista constancia que el demandante contara con una opción económica diferente a continuar vinculado laboralmente, para obtener los ingresos que le garantizaran el sustento personal y familiar, relación de la cual se derivan las cotizaciones reflejadas.

En el anterior contexto, no es procedente atribuirle al demandante las consecuencias negativas de la omisión por parte

de la entidad administradora del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, toda vez que cuenta con la experiencia y personal capacitado para resolver en debida forma la solicitud de reconocimiento pensional, deber que incumplió, generando que el demandante permaneciera activo en el Sistema de Pensiones, siendo su intención pensionarse desde tiempo atrás. Además, **para la fecha en que reclamó la pensión especial, aunque contaba con 51 años de edad, ya había cotizado 1.312 semanas superando las 1.275 exigidas para el año 2014 en la Ley 797 de 2003 y superaba ampliamente las 700 de cotización especial, conforme al Decreto 2090 de 2003; cumpliendo con los parámetros señalados por la Sala de Casación Laboral en la jurisprudencia antes citada, para disfrutar de la pensión especial desde el cumplimiento de los 50 años de edad;** tal como lo dispuso el Juez de Primera Instancia. **En consecuencia, no prospera el recurso de apelación formulado por la apoderada de COLPENSIONES.**

En Consulta en favor de COLPENSIONES se revisa la condena impuesta por concepto de intereses moratorios sobre el retroactivo pensional reconocido, causados a partir del 26 de noviembre de 2017 –día siguiente al cumplimiento de los 55 años de edad -hasta el pago de la obligación:

Condena que habrá de mantenerse, toda vez que conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se causan en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales. Así mismo, el inciso 3° del literal e) del Parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, establece que **los fondos encargados reconocerán la pensión en**

un tiempo no superior a cuatro (4) meses, después de radicada la solicitud con la documentación que acredita el derecho. Por su parte, el **Decreto 656 de 1994 en su artículo 19**, contempla que el Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, **sin que en ningún caso puedan exceder de 4 meses**; generándose a partir del vencimiento del plazo legal con el que cuentan las entidades para resolver sobre la solicitud de pensión y su naturaleza es resarcitoria, no sancionatoria, en tanto tiene como objetivo mitigar los efectos adversos que produce la tardanza en el pago de la pensión (Sentencias SL1461 de 2022 reiterando SL2609-2021); habiendo lugar a su imposición “...aun cuando la entidad hubiera tenido el convencimiento de no otorgar la pensión, como quiera que su naturaleza es resarcitoria, no sancionatoria ... con la finalidad de mitigar los efectos adversos que produce la tardanza en el pago de la pensión en favor de aquel a quien por derecho le corresponde el reconocimiento de la prestación ...” (SL5269 de 2021 reiterando SL1023 de 2020 y SL del 23 septiembre 2002, radicado 18512).

Estando probado que el demandante reclamó el reconocimiento de la pensión especial de vejez, con el cumplimiento de la densidad de semanas del Sistema General de Pensiones y superaba las mínimas de cotización especial, negándose la prestación económica por estudiarse con una normatividad que no era la aplicable y si bien es cierto, el demandante no contaba con 55 años de edad, también lo es que el Juzgado los impuso a partir del día siguiente a la fecha en que el demandante los cumplió.

Siendo procedentes los intereses moratorios en estos casos, pues según Sentencia C-651 de 2015 de la H. Corte

Constitucional “... **el Decreto 2090 de 2003 no consagra un régimen especial de pensiones, sino un esquema normativo de pensiones de alto riesgo que se inscribe en el régimen de prima media con prestación definida, dentro del sistema general de pensiones ...**” (Negritas fuera de texto).

Prescripción:

No operó el fenómeno jurídico de prescripción sobre mesadas pensionales (el derecho a la pensión no prescribe), teniendo en cuenta que reclamó en enero del año 2014, antes de cumplirse tres (3) años desde la causación de la primera mesada reconocida (noviembre de 2012) y presentó demanda el día 20 de abril de 2016, dentro de los tres (3) años siguientes a la expedición del acto administrativo que negó el derecho; conforme a lo consagrado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Revisado el cálculo del retroactivo pensional reconocido en Primera Instancia por valor de \$76.158.451, se encuentra acorde al valor y número de mesadas a que tiene derecho el demandante, liquidado desde el 25 de noviembre de 2012 hasta el 31 de diciembre del año 2020; quedando a cargo de COLPENSIONES continuar reconociendo la mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, con derecho a 13 mesadas al año.

Así las cosas, **esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente confirmar en todas sus partes la Sentencia de Primera Instancia**, incluyendo lo relativo a la condena en Costas.

COSTAS:

Se condenará en Costas de Segunda Instancia a cargo de COLPENSIONES, al no haber prosperado el recurso de apelación formulado, fijándose como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente (\$1.000.000) en favor del demandante señor Gustavo Adolfo Ramírez Rico; de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** en todas sus partes la Sentencia de Primera Instancia, que por vía de **Apelación** se revisa y en el grado jurisdiccional de **Consulta** en favor de COLPENSIONES, incluyendo lo relativo a la condena en Costas; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

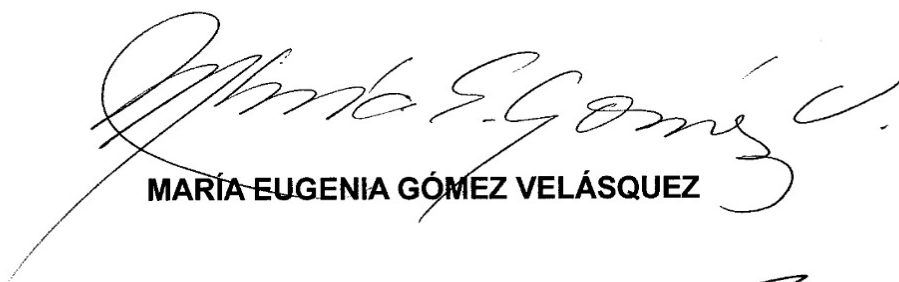
SEGUNDO: Se condena en **Costas** de Segunda Instancia a cargo a cargo de **COLPENSIONES**, fijándose como agencias en

derecho un salario mínimo legal mensual vigente (\$1.000.000) en favor del demandante señor GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ RICO; según lo indicado en la parte motiva.


TERCERO: Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, por el término de un (1) día. Se ordena devolver el proceso al Despacho de origen.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

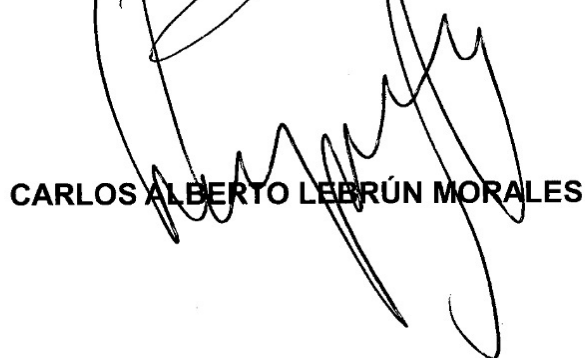
Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ RICO**
Demandado : **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**
Radicado : **05001 31 05 004 2016 00493 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad social –Pensión especial de vejez por alto riesgo, intereses moratorios-
Decisión : Confirma Sentencia condenatoria
Sentencia No : 261

FECHA SENTENCIA:

18 de noviembre de 2022

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Fijado hoy martes 22 de noviembre de 2022 a las 8:00 Am Desfijado hoy martes 22 de noviembre de 2022 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibidem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO